

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJO DE GRADO

Yo Julián Alfonso López Mora identificado(a) estudiante de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, como autor/a del trabajo de grado presentado y titulado:

Lecciones comparadas de la pobreza multidimensional: Análisis de las experiencias de México y Chile para enriquecer la estrategia de medición en Colombia.

Dirigido por: Óscar Alberto Henao Osorio.

En referencia al documento, su autor, abajo firmante declara que:

- El trabajo de grado es inédito, original y de mi exclusiva autoría.
- El contenido del texto y el título no vulneran ningún tipo de derecho de autor, literario, de propiedad o marca de otras personas.
- Asumo la total responsabilidad del contenido expuesto en el trabajo de grado.
- El documento cumple con los requerimientos éticos, bioéticos y de integridad científica de la investigación.

Así mismo, asumo frente a la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido del trabajo de grado presentado, como lo indica la Ley 44 de 1993 Sobre Derechos de Autor, el Art. 61 de la Constitución Política de Colombia, el Art. 671 del Código Civil y demás disposiciones legales.

En Bogotá D.C. a los 30 del mes de noviembre de 2025.

Firma:  _____

Nombre y apellidos: Julián Alfonso López Mora.

Cedula: 1033755895.

Lecciones comparadas de la pobreza multidimensional: Análisis de las experiencias de México y Chile para enriquecer la estrategia de medición en Colombia

Por: Julián Alfonso López Mora

Resumen

Este artículo analiza comparativamente los modelos de medición de pobreza multidimensional de México, Chile y Colombia para identificar aprendizajes que permitan actualizar y fortalecer el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) colombiano. Desde el enfoque de capacidades de Sen y Nussbaum, el método Alkire-Foster y la teoría de la gobernanza, se examina cómo cada país ha definido sus dimensiones, umbrales, ponderaciones, fuentes de datos y mecanismos de revisión. La metodología se basa en un estudio de caso comparativo sustentado en revisión documental y análisis cualitativo de arreglos institucionales, marcos normativos y procesos participativos. Los resultados muestran tres modelos diferenciados: México ha consolidado un IPM jurídicamente vinculante y basado en derechos sociales, gestionado por un organismo autónomo; Chile ha desarrollado un enfoque innovador que incluye dimensiones relacionales, perspectiva de curso de vida y deliberación amplia; mientras que Colombia mantiene un modelo técnicamente consistente, pero con escasa actualización, limitada participación y débil institucionalización. El artículo concluye que Colombia requiere fortalecer su gobernanza participativa, revisar periódicamente las dimensiones y fuentes de datos, e incorporar capacidades emergentes para asegurar que el IPM siga siendo pertinente, legítimo y útil para orientar la política social en un contexto de cambios demográficos, sociales y tecnológicos..

Palabras clave: Pobreza multidimensional; Enfoque de capacidades; Gobernanza; Método Alkire-Foster; Política social.

Abstract

This article presents a comparative analysis of the multidimensional poverty measurement models implemented in Mexico, Chile, and Colombia, aiming to identify lessons to strengthen Colombia's Multidimensional Poverty Index (MPI). Drawing on Sen and Nussbaum's capability approach, the Alkire-Foster method, and governance theory, the study examines how each country defines dimensions, deprivation thresholds, weighting schemes,

data sources, and institutional review mechanisms. Methodologically, the research adopts a comparative case study design based on documentary review and qualitative analysis of institutional arrangements, normative frameworks, and participatory processes. The findings reveal three distinct models: Mexico has developed a legally binding MPI grounded in social rights and managed by an autonomous institution; Chile has introduced an innovative design incorporating relational dimensions, a life-course perspective, and broad deliberative participation; while Colombia maintains a technically consistent but infrequently updated model with limited participation and weak institutionalization. The study concludes that Colombia must enhance participatory governance, periodically revise dimensions and data sources, and incorporate emerging capabilities to ensure that its MPI remains relevant, legitimate, and effective in guiding social policy. Strengthening institutional mechanisms and broadening public deliberation are identified as essential steps for adapting the index to contemporary social, demographic, and technological changes.

Keywords: Multidimensional poverty; Capability approach; Governance; Alkire-Foster method; Social policy.

Introducción

La medición de la pobreza es uno de los debates más influyentes en las ciencias sociales contemporáneas, no solo por su relevancia técnica, sino por su capacidad para definir prioridades públicas y moldear la comprensión social del bienestar. Durante las dos últimas décadas, el tránsito desde métricas centradas exclusivamente en ingresos hacia enfoques multidimensionales transformó la manera de diagnosticar privaciones y orientar la acción estatal. Este giro conceptual, impulsado por el enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum y operacionalizado mediante el método Alkire-Foster, permitió reconocer que la pobreza es un fenómeno complejo que combina restricciones materiales, relacionales y de agencia.

En América Latina, esta transición adquirió especial relevancia en un contexto caracterizado por desigualdades persistentes, heterogeneidad territorial y capacidades estatales asimétricas. México, Chile y Colombia han sido pioneros regionales en la adopción del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), aunque con trayectorias metodológicas e institucionales diferenciadas. México consolidó desde 2008 un modelo con efectos jurídicos vinculantes,

basado en derechos sociales y respaldado por la autonomía técnica del CONEVAL. Chile introdujo desde 2015 un enfoque innovador que incorpora dimensiones relacionales, una perspectiva de curso de vida y procesos deliberativos amplios. Colombia, por su parte, adoptó en 2011 un IPM alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero que ha permanecido prácticamente inalterado y sustentado en una gobernanza predominantemente tecnocrática.

Comprender estas diferencias es fundamental, porque los indicadores no son herramientas neutras. Como afirman Lascoumes y Le Galès, constituyen “instrumentos de acción pública” que definen problemas legítimos, orientan prioridades y configuran la intervención estatal. Así, el IPM no solo mide pobreza: contribuye a construirla como objeto de gobierno mediante decisiones sobre dimensiones, ponderaciones, umbrales y arreglos institucionales. En México, la autonomía del CONEVAL fortalece la legitimidad y la rendición de cuentas; en Chile, la deliberación pública habilita innovación metodológica y apropiación social; en Colombia, la estabilidad estadística convive con una limitada actualización participativa, reduciendo la capacidad de adaptación del índice a transformaciones sociales recientes.

Desde esta perspectiva, estudiar comparativamente a México y Chile no solo es útil desde el punto de vista técnico, sino también desde una mirada política y normativa. Ambos países han logrado conectar la medición con el debate público sobre bienestar, actualizar sus dimensiones conforme a nuevas demandas sociales y producir indicadores sensibles a dinámicas territoriales, demográficas y comunitarias contemporáneas. En contraste, el caso colombiano exhibe un notable rezago pese a la magnitud de los cambios sociales, económicos y tecnológicos que han ocurrido desde 2011.

En este contexto, el objetivo de este estudio es analizar comparativamente los modelos de medición de pobreza multidimensional de México y Chile con el fin de identificar lecciones conceptuales, metodológicas e institucionales que permitan fortalecer y actualizar el IPM colombiano. Para ello, el análisis se orienta a: (i) examinar las diferencias en dimensiones, indicadores, umbrales y ponderaciones desde el método Alkire-Foster; (ii) comparar los arreglos de gobernanza y los mecanismos de participación que estructuran cada IPM; y (iii) evaluar la pertinencia del IPM colombiano desde el enfoque de capacidades, identificando vacíos y oportunidades para su actualización.

Con esta aproximación comparada, el estudio propone una reflexión crítica sobre el papel actual del IPM en Colombia y sobre las posibilidades de avanzar desde un modelo estable pero rígido hacia un esquema más dinámico, participativo y coherente con los desafíos del siglo XXI. La comparación con México y Chile permite identificar rutas de mejora que amplíen la legitimidad, pertinencia e incidencia del IPM como herramienta central para la política social y para la gobernanza democrática del bienestar.

Marco Teórico

El marco teórico de este estudio se estructura en tres ejes articulados: el enfoque de capacidades de Sen y Nussbaum, que concibe la pobreza como privación de libertades y derechos fundamentales; el método Alkire-Foster, que ofrece una arquitectura técnica para operacionalizar esa visión en un índice multidimensional; y la literatura sobre gobernanza, que advierte que los indicadores son instrumentos de poder que configuran prioridades sociales e institucionales.

La conceptualización de la pobreza ha experimentado un giro profundo en las últimas décadas. Tradicionalmente, se entendía como insuficiencia de ingresos, lo que dio origen a mediciones basadas en líneas monetarias absolutas o relativas (Ravallion, 1994). No obstante, este enfoque mostró límites importantes: un hogar puede superar el umbral oficial de ingreso y seguir experimentando carencias severas en salud, educación, seguridad o vivienda. Esta brecha conceptual abrió paso al enfoque multidimensional, que reconoce la pobreza como un fenómeno estructural y heterogéneo, caracterizado por la privación simultánea en distintas esferas del bienestar (Alkire & Foster, 2011).

El giro estuvo fuertemente influenciado por Amartya Sen. Su enfoque de capacidades planteó que el bienestar no depende solo de los recursos, sino de las libertades reales que poseen las personas para elegir y llevar adelante los proyectos de vida que valoran (Sen, 1985). En esta perspectiva, la pobreza constituye una privación de capacidades —no exclusivamente de ingresos— porque restringe el conjunto de opciones disponibles. Martha Nussbaum complementó estas ideas al proponer un listado normativo de capacidades centrales —vida, salud, integridad física, afiliación, control político y material sobre el entorno— que toda sociedad justa debe garantizar (Nussbaum, 2010). Ambos autores trascendieron la frontera

disciplinaria de la economía al posicionar la pobreza como un fenómeno profundamente ligado a derechos humanos y oportunidades vitales.

Este enfoque conceptual influyó directamente en organismos multilaterales. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo en 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que definió el desarrollo como “la ampliación de las opciones de las personas” (PNUD, 1990). Este informe desplazó el énfasis del crecimiento económico hacia las personas como agentes y propósito del desarrollo, y abrió paso a instrumentos estadísticos más sensibles a la complejidad del bienestar (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009). Sin embargo, el IDH no capturaba la simultaneidad de las privaciones ni su distribución, lo que motivó la búsqueda de medidas más precisas.

En este contexto surgió el método Alkire-Foster (AF). Sabina Alkire y James Foster (2007, 2011) desarrollaron un marco formal para identificar y agregar privaciones de manera simultánea en distintas dimensiones, lo que permitió construir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Este método establece criterios precisos de identificación, que determinan quién es considerado pobre en términos multidimensionales según el número y la combinación de privaciones que experimenta un hogar o individuo; y de agregación, que permiten calcular tanto la incidencia (proporción de personas pobres) como la intensidad (promedio de privaciones que enfrentan los pobres). Además, ofrece flexibilidad para que cada país defina sus propias dimensiones, indicadores y ponderaciones conforme a sus prioridades nacionales (Alkire S. , y otros, 2015). Esta adaptabilidad explica su adopción en más de cien países y su uso extendido en la política social contemporánea (OPHI, 2022).

En América Latina, la institucionalización del IPM ha adquirido un lugar destacado. México fue pionero al adoptar en 2008 una medición oficial de pobreza multidimensional, desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Su enfoque combina ingreso y carencias sociales en seis dimensiones: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación (CONEVAL, 2010). Este diseño refleja una visión basada en derechos sociales y es jurídicamente vinculante: determina elegibilidad para programas sociales, orienta la asignación presupuestal y evalúa el desempeño gubernamental (López-Calva, 2019). La autonomía

técnica del CONEVAL ha sido fundamental para garantizar independencia metodológica y credibilidad pública.

Colombia adoptó su IPM en 2011, inspirado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Estrategia Red Unidos. Su estructura incluye cinco dimensiones —educación, niñez y juventud, trabajo, salud y condiciones de vivienda— y quince indicadores (Angulo y otros, 2011). El índice se incorporó a la planeación nacional y al seguimiento de la política social. Sin embargo, una debilidad señalada por la literatura ha sido la falta de actualización de las dimensiones: el IPM colombiano ha permanecido prácticamente inalterado desde su creación a pesar de transformaciones sociales aceleradas (Sánchez Torres y otros, 2020).

Chile introdujo en 2015 un modelo innovador. Tras un amplio proceso participativo que involucró academia, organizaciones sociales y funcionarios, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia adoptó un IPM con cuatro dimensiones y quince indicadores, que incluyen no solo componentes tradicionales, sino también variables relacionales como cohesión social, redes de apoyo y percepción del entorno (PNUD, 2023). Este enfoque reconoce que la pobreza no es estática y que sus manifestaciones varían según edad, género y territorio. Chile incorporó además un enfoque de curso de vida, lo que permite identificar privaciones específicas en infancia, juventud y vejez, en coherencia con sus políticas de protección social.

Las tres experiencias muestran que el IPM no es solo un instrumento técnico, sino también un instrumento político, institucional y de gobernanza. Desde la teoría de la acción pública, los indicadores son “instrumentos de gobierno” que orientan la acción estatal, definen problemas legítimos y estructuran modos de intervención (Lascoumes & Le Galès, 2014). Como advierten Pierre (2000) y Peters (2019), las métricas funcionan como tecnologías de gobierno: moldean incentivos, legitiman decisiones y organizan prioridades dentro de la gestión pública. Por ello, la selección de dimensiones, ponderaciones y umbrales del IPM refleja valores, normas y visiones del bienestar específicas de cada sociedad.

México ejemplifica un modelo de gobernanza técnica autónoma, donde la independencia del CONEVAL garantiza credibilidad y continuidad metodológica. Chile encarna un modelo de gobernanza deliberativa, donde la legitimidad del índice proviene de la consulta pública, la participación académica y la apertura institucional. Colombia se acerca a un modelo de gobernanza tecnocrática ya que, su IPM es estadísticamente robusto y estable, pero con

limitada apertura a procesos de revisión, participación social o deliberación pública. En conjunto, estas diferencias ilustran que los indicadores de pobreza no solo describen la realidad, también la configuran. Para Alkire y Foster (2011) y la CEPAL (2025), cada IPM nacional encarna un contrato social implícito sobre lo que se considera una vida digna.

Así, la persistencia del IPM colombiano sin revisiones profundas durante más de una década evidencia un rezago en la incorporación de dimensiones emergentes del bienestar contemporáneo. La comparación con México y Chile subraya la necesidad de institucionalizar mecanismos de actualización periódica y de incorporar procesos participativos para fortalecer su pertinencia y legitimidad. Más que ampliar arbitrariamente las dimensiones, se trata de construir un sistema capaz de adaptarse a cambios sociales, económicos y tecnológicos, manteniendo coherencia con el enfoque de capacidades y con la gobernanza democrática.

Desde esta perspectiva, el marco teórico permite interpretar la pobreza multidimensional como un fenómeno simultáneamente técnico, político y normativo. El método Alkire-Foster aporta los criterios y procedimientos necesarios para su medición; el enfoque de capacidades aporta el fundamento ético y conceptual; y la teoría de la gobernanza explica cómo los indicadores influyen en decisiones públicas y en la definición de prioridades colectivas. Integrar estos tres planos resulta clave para comprender las diferencias entre México, Chile y Colombia, y para fundamentar la necesidad de fortalecer el IPM colombiano como herramienta de política pública sensible, legítima y acorde con los desafíos del desarrollo sostenible.

Metodología

Este estudio adopta un diseño de estudio de caso comparativo (comparative case study design), de carácter cualitativo y documental, orientado a analizar las decisiones técnicas, políticas e institucionales que han configurado el IPM en Colombia, México y Chile. El enfoque cualitativo permite interpretar los significados y racionalidades que sustentan a las decisiones metodológicas, más allá de su dimensión técnica, mientras que el diseño comparativo facilita identificar patrones, contrastes y lecciones transferibles entre contextos nacionales con trayectorias institucionales diferentes (Yin, 2018).

El estudio de caso comparativo resulta particularmente pertinente cuando se busca comprender fenómenos complejos en su contexto, preservando la particularidad de cada experiencia, pero permitiendo el contraste analítico (Merriam , 1998). En este trabajo, cada país constituye una unidad de análisis (caso) y el IPM nacional su objeto de comparación. La estrategia comparativa no pretende establecer jerarquías entre los modelos, sino comprender cómo las decisiones metodológicas reflejan valores, estructuras de gobernanza y enfoques sobre el bienestar.

En términos operativos, el estudio se desarrolló en dos fases complementarias. La primera correspondió a una revisión documental y normativa, orientada a examinar los marcos legales, técnicos y estadísticos que sustentan la medición de la pobreza multidimensional en los tres países analizados. En el caso de Colombia, se revisaron los informes metodológicos y boletines técnicos elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), desde la adopción oficial del IPM en 2011 hasta 2024. Para México, se analizaron los reportes y metodologías del CONEVAL, institución pionera en América Latina al institucionalizar un IPM nacional desde 2008. En el caso de Chile, se examinaron los documentos técnicos y metodológicos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como los informes del PNUD asociados a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Esta revisión se complementó con literatura académica especializada y con publicaciones recientes de organismos multilaterales, entre ellos la CEPAL (2025) y el PNUD (2025), lo que permitió contrastar los marcos nacionales con los estándares internacionales del enfoque multidimensional.

La segunda fase correspondió al análisis comparado cualitativo, desarrollado a partir de la lógica de la comparación cualitativa propuesta por Ragin (2014), cuyo propósito es identificar combinaciones de condiciones que explican similitudes y diferencias entre casos. La comparación se organizó en torno a cuatro dimensiones analíticas como marco de análisis externo de los 12 pasos para la medición multidimensional de la pobreza que detallan Alkire-Foster: la selección de dimensiones e indicadores, la definición de umbrales y esquemas de ponderación, la frecuencia y uso del IPM en la política pública, y la gobernanza institucional junto con los mecanismos de actualización. Este marco analítico se fundamenta en trabajos

previos de Santos, Villatoro, Mancero y Gerstenfeld (2015) y Lustig (2018), asegurando coherencia académica y comparabilidad conceptual.

De manera transversal, el estudio articula tres perspectivas teóricas para interpretar los hallazgos: el enfoque de capacidades de Sen y Nussbaum, que conceptualiza la pobreza como privación de libertades sustantivas; el método Alkire-Foster, que aporta la estructura técnica del IPM; y la teoría de la gobernanza, que interpreta los indicadores como instrumentos de acción pública capaces de orientar prioridades, moldear decisiones y definir problemas legítimos. Esta integración permite analizar los IPM no solo como métricas, sino como productos institucionales que expresan visiones del bienestar y distribuciones específicas de poder, que reconoce que la pobreza multidimensional como un fenómeno medible y una construcción social situada (Herrera, 2023).

Justificación de la selección de México y Chile como casos de comparación

La elección de México y Chile como referentes comparativos responde a criterios conceptuales, metodológicos e institucionales que los convierten en casos paradigmáticos en la medición de la pobreza multidimensional en América Latina. El objetivo no es contrastar tasas de pobreza entre países, sino examinar cómo cada uno ha traducido el marco del método Alkire-Foster y del IPM Global en decisiones sobre dimensiones, umbrales y arreglos de gobernanza (Alkire & Santos, 2014). Esta aproximación permite comprender cómo se configuran institucionalmente los IPM, qué valores expresan y qué prioridades reflejan en el diseño de sus políticas sociales.

La pertinencia regional se fundamenta en que América Latina comparte rasgos estructurales —desigualdad persistente, informalidad laboral, brechas territoriales y capacidades estatales heterogéneas— que moldean la forma en que se conceptualiza y gestiona la pobreza (CEPAL, 2025). Además, la región posee una tradición estadística común, fortalecida por la cooperación entre instituciones nacionales y organismos multilaterales como el PNUD y la CEPAL, lo que facilita la comparación metodológica y conceptual. Bajo este marco, México y Chile representan dos modelos sólidos y contrastantes que permiten situar el caso colombiano dentro de un mismo campo de experiencias, con desafíos similares, pero soluciones institucionales diferentes.

México es un referente fundamental por haber sido pionero en institucionalizar, desde 2008, un IPM nacional bajo la conducción del CONEVAL. Su diseño combina ingreso y carencias sociales desde un enfoque de derechos, y su carácter vinculante lo convierte en un instrumento de impacto directo en la elegibilidad de programas sociales, la asignación presupuestal y la evaluación del desempeño estatal (López-Calva, 2019). La autonomía técnica del CONEVAL refuerza la credibilidad del proceso y asegura continuidad metodológica más allá de los ciclos políticos.

Chile, por su parte, constituye un modelo más reciente e innovador. Desde 2015, su IPM incorpora dimensiones relacionales y un enfoque de curso de vida que distingue privaciones según etapas etarias (PNUD, 2024). Este diseño responde a una visión más amplia del bienestar, que reconoce la importancia de los vínculos sociales y de las condiciones comunitarias. Su construcción se apoyó en procesos deliberativos amplios con academia, organizaciones sociales y expertos, lo que fortaleció su legitimidad institucional (CEPAL, 2024).

La comparación de México y Chile con Colombia es pertinente tanto por la afinidad estructural entre los países como por la diversidad de sus enfoques. México prioriza derechos sociales garantizables; Chile enfatiza cohesión social y bienestar relacional; y Colombia mantiene desde 2011 un modelo estable pero con escasa actualización conceptual y técnica. Por ello, la relevancia analítica de México y Chile no reside en sus niveles de pobreza, sino en la manera en que traducen el marco del IPM en contratos sociales específicos: qué consideran una vida digna, qué privaciones juzgan inadmisibles y qué instituciones aseguran la sostenibilidad del índice.

En conjunto, la selección de estos dos casos se justifica tanto por su robustez metodológica como por su valor contextual para la región. Sus experiencias ofrecen lecciones transferibles para fortalecer la legitimidad, flexibilidad y gobernanza del IPM colombiano. La comparación cualitativa permite, así, identificar oportunidades de mejora en la actualización de dimensiones, en los criterios de ponderación y en la institucionalización de mecanismos de revisión, elementos claves para consolidar un IPM más pertinente, inclusivo y coherente con los desafíos actuales del desarrollo sostenible.

Análisis comparado de la medición de la pobreza multidimensional en Colombia, México y Chile

El análisis comparado del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Colombia, México y Chile evidencia cómo la adopción del método Alkire-Foster —común a los tres países— ha dado lugar a modelos nacionales diferenciados, resultado de decisiones institucionales, políticas y conceptuales propias. Más que contrastar cifras o niveles de pobreza, el interés reside en comprender los procesos de diseño institucional, la selección de dimensiones e indicadores, la definición de umbrales de privación y la forma en que estas decisiones se articulan con las estrategias de política social. De este modo, la comparación permite analizar cómo cada país traduce el marco global del IPM —promovido por el PNUD y la Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI)— en un instrumento adaptado a su realidad (Alkire & Santos, 2014).

La siguiente tabla sintetiza las principales características de los IPM nacionales:

Elemento	Colombia	México	Chile
Año de implementación	2011	2008	2015
Institución responsable	DANE (con apoyo del DNP)	CONEVAL (organismo autónomo)	Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Número de dimensiones	5	6	4
Variables	15 (educación, salud, trabajo, niñez, condiciones de vida)	12 (educación, salud, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos, cohesión social)	15 (educación, salud, vivienda, redes, entorno)
Umbral de pobreza multidimensional	33,3% (al menos 1/3 de privaciones)	Al menos 1 carencia social y estar bajo la línea de ingreso	22,5% de privaciones (ponderadas)

Fuente de datos	Encuesta de Calidad de Vida (ECV)	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)	Encuesta CASEN
Frecuencia de medición	Anual (según disponibilidad)	Bianual	Bianual
Articulación con política pública	Moderada: insumo para planeación nacional (CONPES, PND)	Alta: determina elegibilidad de programas sociales	Alta: vinculada a la Red de Protección Social
Inclusión de ingreso	No	Sí (dimensión obligatoria junto a carencias sociales)	No
Enfoque diferencial	Territorial y por hogar	Territorial y grupos vulnerables	Curso de vida (infancia, juventud, vejez)

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2023), CONEVAL (2022) y Ministerio de Desarrollo Social de Chile (2021).

La trayectoria histórica muestra que México fue pionero en la región al institucionalizar en 2008 un IPM oficial bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Su modelo combina ingreso y carencias sociales, lo que permite captar simultáneamente pobreza estructural y coyuntural. Esta arquitectura metodológica se sostiene sobre un arreglo institucional robusto: la autonomía del CONEVAL garantiza independencia técnica y continuidad metodológica, elementos que han reforzado la credibilidad del índice y su uso vinculante en la asignación presupuestal y la elegibilidad de programas sociales (Villalobos López, 2023).

Colombia, por su parte, adoptó su IPM en 2011 bajo el liderazgo del DANE y el DNP, estructurado en cinco dimensiones y quince indicadores. El índice ha cumplido una función central en el seguimiento de políticas sociales y en la planeación nacional (Angulo Salazar, Díaz Cuervo, & Pardo Pinzón, 2011). Sin embargo, la exclusión explícita del ingreso dentro de la estructura del IPM colombiano genera una medición fragmentada, que dificulta integrar las privaciones económicas con las privaciones sociales. Como resultado, hogares que han

superado la línea de pobreza monetaria pero enfrentan privaciones severas en educación, salud o servicios básicos pueden no ser identificados adecuadamente, lo que reduce la capacidad de diseñar intervenciones comprehensivas.

Chile institucionalizó su IPM en 2015 incorporando innovaciones metodológicas que amplían la comprensión del bienestar. Su diseño incluye variables relacionales —como redes de apoyo y percepción del entorno barrial— y se estructura desde un enfoque de curso de vida que diferencia las privaciones según etapas vitales, como infancia, juventud y vejez (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2024). Este modelo responde a la necesidad de capturar dimensiones sociales y comunitarias de la pobreza en un contexto marcado por cambios demográficos acelerados. Además, su construcción estuvo acompañada de procesos deliberativos amplios, lo que fortaleció la legitimidad del índice (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2024).

En conjunto, la comparación evidencia que los tres países representan tres modelos conceptuales y de gobernanza distintos ya que Colombia prioriza dimensiones estructurales alineadas con las necesidades básicas; México enfatiza derechos sociales garantizables y seguridad social, en consonancia con la arquitectura institucional del CONEVAL; y Chile incorpora dimensiones relacionales asociadas a cohesión social y entorno comunitario. Estas diferencias no son meramente técnicas, sino expresión de concepciones nacionales acerca de lo que constituye una vida digna y de las prioridades en la política pública (Alkire S. , y otros, 2015).

Así mismo, la gobernanza institucional condiciona de manera decisiva la capacidad del IPM para influir en el diseño de políticas. En México, la autonomía del CONEVAL garantiza que el IPM tenga efectos normativos directos; en Chile, el Ministerio de Desarrollo Social utiliza el índice para focalizar la Red de Protección Social; mientras que, en Colombia, la ausencia de un esquema institucional con funciones vinculantes ha limitado el uso del IPM a fines principalmente diagnósticos, sin impacto directo en asignaciones presupuestales o criterios de elegibilidad.

La periodicidad y consistencia de las fuentes de información también marcan diferencias relevantes. México y Chile, con encuestas bianuales estables (ENIGH y CASEN), han consolidado series comparables que permiten análisis temporales robustos. En Colombia,

aunque la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) se aplica anualmente, no todas sus rondas garantizan plena comparabilidad debido a variaciones en diseño muestral o en instrumentos de captura, lo que complica la identificación de tendencias y la respuesta a choques como la pandemia del COVID-19.

De igual forma, los umbrales y esquemas de ponderación adoptados en cada país reflejan decisiones técnicas y políticas que determinan distintas formas de priorizar el bienestar. México utiliza un criterio dual ingreso-carencias; Chile opta por un umbral de 22,5% de privaciones ponderadas; y Colombia opera con un umbral del 33,3%. Estas diferencias hacen difícil establecer comparaciones numéricas estrictas, pero permiten examinar cómo cada modelo pondera o valora distintas dimensiones del bienestar.

En ese orden de ideas, el balance comparativo indica que, aunque el IPM colombiano ha sido fundamental para la planeación y el seguimiento de políticas sociales, aún presenta márgenes importantes de mejora. México ofrece un modelo integral y con efectos jurídicos vinculantes; Chile aporta innovaciones en dimensiones relacionales y enfoques de curso de vida. Tomando estas lecciones, Colombia podría fortalecer la pertinencia, legitimidad y utilidad de su IPM mediante la actualización de dimensiones, el robustecimiento de su institucionalidad y una mayor consistencia y periodicidad en sus fuentes de datos.

Aplicación comparada de los 12 pasos del método Alkire-Foster y el papel de la participación en el diseño de los IPM de México, Chile y Colombia

El método Alkire-Foster (AF), desarrollado por Sabina Alkire y James Foster (2011), se ha consolidado como el estándar global para la medición de la pobreza multidimensional. Aunque su estructura formal es ampliamente conocida, su aplicación concreta varía de manera significativa según los sistemas institucionales, las trayectorias normativas y las decisiones políticas de cada país. Los doce pasos del método orientan la construcción de un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desde la definición del propósito del indicador hasta la identificación de privaciones, la elección de umbrales, la validación de fuentes, el cálculo de incidencia e intensidad y, finalmente, la fijación de ponderaciones. Analizar comparativamente cómo México, Chile y Colombia aplican estos pasos permite observar diferencias metodológicas, así como contrastes profundos en gobernanza, participación ciudadana y legitimidad estadística.

En el primer paso, relativo al propósito del índice, los países adoptan enfoques claramente diferenciados. México definió desde 2008 un propósito explícito y vinculante: medir la pobreza para evaluar la política social y determinar la elegibilidad para programas, mandato asignado por ley al CONEVAL (López-Calva, 2019). Chile orientó su IPM hacia el fortalecimiento de la Red de Protección Social y el monitoreo del bienestar a lo largo del curso de vida (PNUD, 2024). Colombia concibió su IPM como un instrumento técnico de diagnóstico y planeación, sin efectos vinculantes sobre la asignación presupuestal ni la focalización (Angulo y otros, 2011). Estas diferencias iniciales condicionan el grado de incidencia del indicador en la política social de cada país.

Tabla 1. Propósito institucional del IPM en México, Chile y Colombia

País	Propósito del IPM	Naturaleza normativa del propósito
México	Medición oficial + elegibilidad + evaluación de política social	Mandato legal, vinculante
Chile	Orientación de la Red de Protección Social + monitoreo del bienestar	Mandato ministerial
Colombia	Diagnóstico y planeación	No vinculante, técnico

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2010, 2016), PNUD (2024) y Angulo y otros (2011).

Las mayores divergencias emergen en los pasos dos y tres, relativos a la selección de dimensiones e indicadores. México estructuró su IPM a partir de los derechos sociales constitucionales, mediante consultas técnicas interinstitucionales coordinadas por el CONEVAL. Chile desarrolló un proceso más amplio y deliberativo —mesas técnicas, trabajo académico, organizaciones sociales— que permitió incorporar dimensiones relacionales como cohesión social, redes de apoyo y percepción del entorno (PNUD, 2023). En Colombia, el diseño recayó en equipos técnicos del DNP y el DANE, sin evidencia de procesos participativos amplios ni revisiones posteriores (CONPES 150 de 2012). Estos modelos reflejan, respectivamente, una participación técnica estructurada, una deliberación social amplia y un enfoque predominantemente tecnocrático.

Tabla 2. Participación en la selección de dimensiones e indicadores en México, Chile y Colombia

Criterio	México	Chile	Colombia
Tipo de proceso participativo	Consultas técnicas interinstitucionales; talleres con expertos; deliberación con organismos federales. Proceso formalizado.	Proceso deliberativo abierto: mesas técnicas, diálogos con academia y organizaciones sociales; apoyo metodológico del PNUD.	Predominio técnico-institucional (DNP–DANE). No hay evidencia de consultas públicas amplias.
Actores involucrados	CONEVAL, secretarías federales, académicos, expertos sectoriales.	Ministerio de Desarrollo Social y Familia, universidades, centros de investigación, PNUD, actores sociales.	Equipos técnicos del DNP y DANE; revisión de literatura; participación restringida.
Dimensiones añadidas por participación	Dimensiones derivadas del enfoque constitucional de derechos: salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social.	Inclusión de variables relacionales y subjetivas: redes de apoyo, cohesión social, percepción del entorno.	No se evidencia inclusión de nuevas dimensiones a partir de participación externa; estructura estable desde 2011.
Presencia de dimensiones relacionales	Limitada (solo cohesión social dentro de carencias).	Alta: redes, cohesión social, entorno barrial.	Ausente: no incorpora variables relacionales o subjetivas.
Carencia de procesos de revisión	No: revisiones periódicas documentadas cada cinco años, con actas públicas.	No: ajustes en cada ronda de CASEN	Sí: ausencia de un mecanismo formal de revisión

		con paneles de expertos.	periódica; actualizaciones mínimas.
--	--	--------------------------	-------------------------------------

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2016), Ministerio de Desarrollo Social de Chile y PNUD (2023), y CONPES 150 de 2012.

En los pasos cuatro y cinco, relativos a la definición de umbrales de privación, los tres países presentan niveles diferenciados de deliberación y transparencia. México adoptó ponderaciones equiproporcionales y un umbral dual (ingreso + carencias), resultado de debates documentados (CONEVAL, 2010). Chile fijó un umbral del 22,5%, sustentado en pruebas estadísticas y validación experta (PNUD, 2024). Colombia definió un umbral de 33,3%, coherente con los lineamientos de AF, pero sin registro público de discusión metodológica.

Los pasos seis y siete, vinculados con la validación y las fuentes de datos, dependen en gran medida de la estabilidad estadística. México basa su IPM en la ENIGH, una encuesta robusta y de periodicidad regular (CONEVAL, 2025). Chile emplea la CASEN, que provee comparabilidad temporal y desagregación territorial. Colombia utiliza la Encuesta de Calidad de Vida (ECV); aunque se aplica anualmente, sus variaciones muestrales pueden afectar la comparabilidad interanual (DANE, 2025), introduciendo desafíos para el monitoreo consistente de tendencias.

El octavo paso, relativo a la desagregación, muestra una de las innovaciones más importantes del caso chileno: un enfoque de curso de vida que distingue entre infancia, juventud y vejez, además de una fuerte desagregación territorial (PNUD, 2023). México desagrega por regiones y grupos vulnerables, mientras que Colombia mantiene una lectura por hogar y territorio, sin integrar sistemáticamente enfoques diferenciales de edad o género (CEPAL, 2024).

Tabla 3. Desagregación territorial y enfoque diferencial en México, Chile y Colombia

País	Desagregación territorial	Desagregación por grupos	Enfoque diferencial
México	Regiones	Grupos vulnerables	Derechos

Chile	Regiones + comunas	Etapas del curso de vida	Enfoque relacional
Colombia	Regiones / rural-urbano	Hogar	Sin enfoque sistemático

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2023), CEPAL (2024) y DANE–DNP (2011–2024).

Una diferencia crítica aparece en los pasos nueve, diez y once del método AF, correspondientes a la estimación de la incidencia (H), la intensidad promedio de privaciones (A) y la medida ajustada de pobreza multidimensional (M0). México calcula y divulga oficialmente los tres valores, lo que permite comprender no solo cuántas personas son pobres, sino cuántas privaciones acumulan en promedio, fortaleciendo la orientación programática y presupuestal (CONEVAL, 2016). Chile también incorpora H, A y M0 en sus informes CASEN para analizar diferencias territoriales y por etapa vital (PNUD, 2023). Colombia, aunque calcula internamente estas medidas siguiendo la estructura AF, no las comunica sistemáticamente en sus boletines oficiales; la divulgación se concentra casi exclusivamente en la incidencia. Este vacío limita la comprensión pública de la severidad de la pobreza y reduce la comparabilidad con países que sí reportan el conjunto completo de valores AF.

Tabla 4. Semáforo de gobernanza del IPM en México, Chile y Colombia

País	Transparencia	Acceso a datos	Estrategia de comunicación	Autonomía institucional
México				
Chile				
Colombia				

Fuente: Elaboración propia con base en Villalobos López (2023), Ministerio de Desarrollo Social de Chile (2015), y DANE (2025).

De igual forma, el paso 12 del método AF —fijar las ponderaciones— revela diferencias particularmente estructurales entre los tres países. México justifica sus ponderaciones en el marco constitucional de derechos sociales y en deliberaciones técnicas interinstitucionales documentadas. Chile define ponderaciones a partir de validación estadística, análisis de sensibilidad y revisión de paneles expertos, integrando además criterios relacionales y de curso de vida. Colombia adoptó ponderaciones fijas desde 2011, sin evidencia de procesos participativos ni de análisis público de alternativas metodológicas. Esta ausencia de un

proceso formal y actualizado del paso 12 restringe la posibilidad de ajustar el índice a nuevas concepciones de bienestar o a transformaciones socioeconómicas, afectando su sensibilidad y legitimidad.

Tabla 5. Mecanismos de revisión del IPM y su incidencia en la política pública en México, Chile y Colombia

País	Mecanismo de revisión	Periodicidad	Efectos en política pública
México	Comité técnico–interinstitucional	Cada 5 años	Vinculante
Chile	Revisión CASEN + panel de expertos	Cada ronda (2–3 años)	Ajustes regulares
Colombia	No hay mecanismo formal	Ninguna	Uso diagnóstico

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2025), PNUD (2024) y CEPAL (2025).

En conjunto, la comparación evidencia que la participación no es un elemento accesorio, sino un componente sustantivo para asegurar la calidad técnica y legitimidad del IPM. México institucionaliza la participación técnica a través de un organismo autónomo que revisa y documenta cada decisión relevante; Chile la convierte en un proceso deliberativo y continuo que facilita innovaciones metodológicas; Colombia mantiene un enfoque tecnocrático con estabilidad estadística, pero con menor apertura para revisar o actualizar los componentes clave del método AF, incluido su paso 12. De acuerdo con Lascoumes y Le Galès (2014), los indicadores no solo describen la realidad, sino que la configuran: orientan prioridades, legitiman decisiones y definen los problemas socialmente visibles. Bajo esta premisa, el desafío para Colombia consiste en avanzar hacia un proceso institucionalizado que permita revisar de manera periódica las decisiones metodológicas, ampliar la participación y fortalecer la pertinencia del IPM como herramienta para orientar la política pública en un contexto de profundas transformaciones sociales.

Discusión de resultados

Los resultados del análisis comparado confirman que las decisiones metodológicas y las estructuras institucionales que sustentan los IPM nacionales no son neutras: expresan cómo

cada sociedad concibe el bienestar y define su contrato social. Como plantean Lascoumes y Le Galès (2014), los instrumentos técnicos de acción pública —incluidos los indicadores estadísticos— tienen un efecto performativo: no solo describen la realidad, sino que la configuran, definen prioridades y orientan la acción estatal. Desde esta perspectiva, los IPM de México, Chile y Colombia actúan simultáneamente como herramientas de medición y como dispositivos de gobernanza, en la medida en que moldean la forma en que el Estado interpreta y gestiona la pobreza.

Desde la teoría de las capacidades de Amartya Sen, se observan diferencias importantes en la manera en que los países traducen las capacidades en dimensiones empíricas. México, al integrar ingreso y derechos sociales, privilegia las “libertades instrumentales”, aquellas condiciones materiales que permiten ejercer agencia y expandir las oportunidades de las personas (Sen, 1999). Chile incorpora dimensiones relacionales y subjetivas —como cohesión social, redes de apoyo o percepción del entorno— que se aproximan a las “libertades de agencia”, vinculadas con la posibilidad de participar, vincularse y construir sentido comunitario. Colombia, por su parte, mantiene un IPM estable y técnicamente consistente, enfocado en privaciones estructurales, pero sin incorporar capacidades emergentes que condicionan las libertades reales en la vida contemporánea.

La perspectiva de Martha Nussbaum (2010) permite profundizar en la dimensión ética de estos hallazgos. Para la autora, una sociedad justa debe garantizar un conjunto de capacidades centrales —vida, salud, integridad corporal, afiliación y control sobre el entorno— que habiliten una vida digna. Desde este enfoque, los tres IPM reflejan valores normativos distintos: México enfatiza la garantía de derechos sociales básicos; Chile prioriza la cohesión social y la integración comunitaria; y Colombia reproduce un enfoque estructural centrado en servicios esenciales. La ausencia de revisiones metodológicas profundas en el caso colombiano desde 2011 evidencia un rezago en la incorporación de nuevas capacidades.

El método Alkire-Foster, aunque constituye la base común de los tres índices, también revela la importancia del proceso de gobernanza que acompaña su aplicación. Como señalan Alkire y otros (2015) y la OPHI (2022), el método no define a priori qué dimensiones incluir ni qué umbrales adoptar: su calidad depende del grado de deliberación institucional y social que acompaña su implementación. México y Chile han consolidado modelos donde la

participación técnica, social o académica permite mantener los índices actualizados y legítimos. En Colombia, en cambio, la falta de mecanismos institucionalizados de participación o revisión periódica ha generado un IPM técnicamente robusto, pero políticamente débil, con limitada capacidad para orientar decisiones distributivas o suscitar debates públicos sobre el bienestar.

El análisis también permite interpretar los resultados desde la teoría de la gobernanza. México exhibe un modelo de gobernanza técnica autónoma, donde el CONEVAL asegura independencia política y rigor metodológico, lo que refuerza la credibilidad del indicador y su incidencia en la política social. Chile constituye un ejemplo de gobernanza deliberativa, en la que la legitimidad proviene de la apertura a expertos, academia y actores sociales, habilitando un aprendizaje colectivo y una actualización constante del IPM. Colombia reproduce un modelo de gobernanza tecnocrática, donde la autoridad estadística es fuerte, pero existen escasos vínculos con espacios de participación, control social o deliberación pública. Este rasgo coincide con la advertencia de la CEPAL (2024) sobre la necesidad de integrar los indicadores de pobreza en sistemas de protección social más amplios, capaces de articular evidencia, participación y rendición de cuentas.

Así mismo, el análisis evidencia que medir la pobreza es una práctica política y cultural. En los contextos donde la construcción del IPM ha involucrado participación ciudadana, consulta académica y diálogo interinstitucional —como México y Chile— el índice no solo mide la pobreza, sino que contribuye a construir consensos sociales sobre lo que significa vivir dignamente. En Colombia, en cambio, la definición de dimensiones y umbrales ha permanecido casi exclusivamente en el ámbito técnico, lo que dificulta la apropiación social del indicador y limita su capacidad para convocar acuerdos amplios en torno al bienestar.

De igual forma, la articulación entre teoría y evidencia reafirma el argumento central del estudio: la medición de la pobreza multidimensional es inseparable de la construcción colectiva del bienestar. Siguiendo a Sen (1985) y Nussbaum (2010), definir la pobreza implica decidir qué libertades consideramos valiosas; y como sugieren Alkire y Foster (2011), estas decisiones deben basarse en procesos participativos que reflejen las prioridades sociales. México y Chile muestran que la actualización periódica, la deliberación y la participación fortalecen la pertinencia y el impacto del IPM en la política pública. Para

Colombia, el desafío pasa por avanzar hacia un modelo de gobernanza participativa que combine rigor técnico, diálogo social y actualización conceptual, de modo que su IPM siga siendo una herramienta legítima, dinámica y útil para orientar la reducción de la pobreza en el contexto cambiante del siglo XXI.

Conclusiones

El análisis comparado de los modelos de pobreza multidimensional de México, Chile y Colombia permite concluir que, aunque los tres países comparten como base el método Alkire-Foster, las diferencias en sus estructuras institucionales, en sus procesos de deliberación y en sus concepciones normativas del bienestar han dado lugar a configuraciones nacionales claramente diferenciadas. Estas divergencias no son únicamente técnicas: expresan cómo cada sociedad entiende el bienestar, qué privaciones considera inaceptables y qué prioridades ubica en el centro de su contrato social. En relación con el objetivo general del estudio, los resultados muestran que el enfoque de capacidades, el método AF y la perspectiva de la gobernanza ofrecen un marco sólido para interpretar esas diferencias y convertirlas en insumos para la reflexión sobre el caso colombiano.

En línea con el propósito de extraer lecciones comparadas para Colombia, la experiencia de México y Chile evidencia que la solidez técnica del método Alkire-Foster se potencia cuando está acompañada por instituciones fuertes y mecanismos formales de revisión periódica. México, a través de un organismo autónomo como el CONEVAL, ha consolidado un IPM jurídicamente vinculante, articulado con la asignación presupuestal y la elegibilidad de programas sociales. Chile, por su parte, ha desarrollado un modelo sustentado en procesos deliberativos amplios, que han permitido incorporar dimensiones relacionales y subjetivas —como cohesión social, redes de apoyo o percepción del entorno— y aplicar un enfoque de curso de vida. Frente a estos casos, Colombia aparece como un modelo metodológicamente consistente, pero con escasa actualización y débil institucionalización de mecanismos de revisión, lo que limita la capacidad del IPM para adaptarse a nuevas formas de pobreza y para influir de manera directa en las decisiones de política social.

Desde el enfoque de capacidades de Sen y Nussbaum, el estudio confirma que la selección de dimensiones e indicadores es un acto normativo que traduce en términos empíricos qué se considera una vida digna. México privilegia libertades instrumentales vinculadas a la garantía

de derechos sociales básicos; Chile incorpora libertades asociadas a la agencia y a la integración comunitaria; y Colombia mantiene un enfoque estructural centrado en servicios esenciales. El hecho de que el IPM colombiano no haya sufrido revisiones de fondo desde 2011 pone de relieve un rezago en la incorporación de capacidades emergentes que hoy condicionan de manera decisiva las oportunidades reales de las personas. De este modo, se cumple el objetivo específico de vincular los hallazgos empíricos con el enfoque de capacidades, mostrando que la multidimensionalidad de la pobreza no se agota en la cobertura de necesidades básicas.

Los resultados también confirman la hipótesis sobre el papel central de la gobernanza en la calidad y legitimidad de los IPM nacionales. México representa un modelo de gobernanza técnica autónoma, donde la independencia de CONEVAL refuerza el rigor metodológico y la credibilidad pública del índice. Chile encarna un modelo de gobernanza deliberativa, en el que la legitimidad se construye mediante la apertura a expertos, academia y actores sociales, y donde la actualización del IPM es parte de un proceso de aprendizaje colectivo. Colombia, en cambio, reproduce un esquema de gobernanza tecnocrática: la medición descansa en un aparato estadístico sólido, pero carece de canales institucionalizados de participación, control social y revisión sistemática. Este contraste muestra que los IPM, además de instrumentos de medición, son dispositivos de acción pública que orientan prioridades, definen problemas legítimos y estructuran los márgenes de maniobra de la política social.

En conjunto, la articulación entre teoría y evidencia permite afirmar que la medición de la pobreza multidimensional es inseparable de la construcción colectiva del bienestar. Definir qué se mide implica decidir qué libertades se consideran valiosas y qué privaciones resultan intolerables, decisiones que no pueden quedar confinadas al ámbito exclusivamente técnico. Las experiencias de México y Chile muestran que la actualización periódica, la deliberación y la participación fortalecen la pertinencia del IPM y amplían su incidencia en la política pública. Para Colombia, el estudio sugiere tres líneas de acción coherentes con los objetivos planteados: actualizar dimensiones e indicadores a la luz de nuevas capacidades relevantes; institucionalizar mecanismos de revisión y participación que vinculen el índice con el debate público; y fortalecer la gobernanza del IPM para que su uso trascienda el diagnóstico y se

convierta en un insumo efectivo de diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de reducción de la pobreza en un contexto social y económico en rápida transformación.

Bibliografía

- Alkire, S., & Foster, J. (2007). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *OPHI Working Paper Series*(7), 1-34. Recuperado el 19 de Enero de 2025, de https://ophi.org.uk/sites/default/files/ophi-wp7_vs2.pdf
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Understandings and misunderstandings of multidimensional poverty measurement. *The Journal of Economic Inequality*, IX, 289-314. Recuperado el 10 de Enero de 2025, de <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9181-4>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, LIX, 251-274. Recuperado el 3 de Septiembre de 2025, de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X14000278>
- Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., & Ballon, P. (2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*. Recuperado el 21 de Julio de 2025, de <https://academic.oup.com/book/11882>
- Angulo Salazar, R. C., Díaz Cuervo, Y., & Pardo Pinzón, R. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010. *Archivos de Economía*(382), 1-57. Recuperado el 3 de Febrero de 2025, de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Economicos/382.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. (2021). *Panorama Social de América Latina 2020*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. Recuperado el 10 de Julio de 2025, de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/500c9ce1-b11e-49d9-99a3-b3f371332f70/content>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. (2024). *Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo*. Santiago de Chile: Comisión

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. Recuperado el 2 de Septiembre de 2025, de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b47d0172-5948-467c-804e-083de2968fe9/content>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. (2025). *Índice de pobreza multidimensional para América Latina*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. Recuperado el 10 de Junio de 2025, de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7e7175fe-3e78-4fe3-aa50-8aa94dc0ac58/content>

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL. (2016). *¿Cómo se logró construir la medición de pobreza del CONEVAL?* México D.F.: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL. Recuperado el 3 de Junio de 2025, de [https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Como_logro_construir_la_medicion_de_Coneval%20\(1\).pdf](https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Como_logro_construir_la_medicion_de_Coneval%20(1).pdf)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL. (2010). *Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México*. México D.F.: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL. Recuperado el 11 de Mayo de 2025, de https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL. (2025). *Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024*. Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL. Recuperado el 7 de Septiembre de 2025, de https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/IEPDS_2024.pdf

Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES. (2012). *Metodologías Oficiales y Arreglos Institucionales para la Medición de la Pobreza en Colombia*.

Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación - DNP. Recuperado el 3 de Abril de 2025, de <https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/conpes/social/150.pdf>

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Londres: SAGE Publications. Recuperado el 9 de Septiembre de 2025, de https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2025). *Boletín técnico. Pobreza Multidimensional en Colombia*. Bogotá D.C.: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Recuperado el 30 de Septiembre de 2025, de <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2024.pdf>

Fascioli, A. (2025). *Protección social y pobreza: Abordando la multidimensionalidad del problema*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina - IICSAL. Recuperado el 19 de Julio de 2025, de <https://philpapers.org/archive/GARPSY-3.pdf>

George, A., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: The MIT Press.

Giles Álvarez, L., Hernández Florez, M., Larrahondo, C., Muñoz-Mora, J. C., Angulo, G. D., & Quintero, L. M. (2024). *Desigualdades territoriales en Colombia: realidades y perspectivas*. Bogotá D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Recuperado el 12 de Mayo de 2025, de <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Desigualdades-territoriales-en-Colombia-realidades-y-perspectivas.pdf>

Gunturiz, A., Gómez Cárdenas, C., Puello Socarrás, J. F., & Lucca, J. B. (2019). El método comparado y el estudio de las políticas sociales en América Latina y el Caribe. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales (RELMECS)*, VIII(2). Recuperado el 16 de Junio de 2025, de <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74239>

Herrera, J. D. (2023). *La comprensión de lo social: Horizontes hermenéutico de las ciencias sociales*. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes.

- Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2014). *Sociología de la acción pública* (Segunda ed.). (V. Ugalde, Trad.) México D.F.: El Colegio de México. Recuperado el 3 de Mayo de 2025, de <https://accionestatal.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/2-lascoumes-y-lc3a8-gales.pdf>
- López-Calva, L. F. (2019). Índice de Pobreza Multidimensional: Repensando la medición, mejorando la gobernanza. *Dimensiones*(6), 17-19. Recuperado el 10 de Julio de 2025, de https://www.mppn.org/wp-content/uploads/2019/04/Dimensiones_6_webversion_ES.pdf
- Lustig, N. (2018). Measuring the Distribution of Household Income, Consumption and Wealth: State of Play and Measurement Challenges. *Tulane Economics Working Paper Series*, 1-42. Recuperado el 29 de Agosto de 2025, de <http://repec.tulane.edu/RePEc/pdf/tul1801.pdf>
- Merriam , S. (1998). *Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education*. San Francisco: Jossey-Bass Inc Pub.
- Ministerio de Desarrollo Social. (2015). *Informe de Desarrollo Social*. Santiago de Chile: Ministerio de Desarrollo Social. Recuperado el 5 de Junio de 2025, de https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/pdf/upload/Libro_IDS_2015_final.pdf
- Multidimensional Poverty Peer Network - MPPN. (2023). *Cómo aplicar el método Alkire Foster*. Oxford: Multidimensional Poverty Peer Network - MPPN. Recuperado el 10 de Agosto de 2025, de <https://www.mppn.org/es/pobreza-multidimensional/como-se-calcula/>
- Nussbaum, M. (2010). *Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Ordóñez-Matamoros, G. (2024). *Manual de análisis y diseño de políticas públicas*. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
- Oxfam Colombia. (2025). *Econo Nuestra: Informe sobre desigualdad en Colombia*. Bogotá D.C.: Oxfam Colombia. Recuperado el 10 de Junio de 2025, de

https://www.oxfamcolombia.org/wp-content/uploads/2025/01/INFORME-OXFAM_AECID.pdf

Oxford Poverty & Human Development Initiative - OPHI. (2022). *Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty*. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative - OPHI. Recuperado el 23 de Julio de 2025, de https://ophi.org.uk/sites/default/files/2024-02/GMPI_2022_Unpacking.pdf

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Washington D. C.: SAGE Publications. Recuperado el 9 de Septiembre de 2025, de <https://books.google.com.co/books?id=-CM9BQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Peters, G. (2019). *Institutional Theory in Political Science*. Pittsburgh: Edward Elgar.

Pierre, J. (2000). *Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2023). *Medición de la Pobreza Multidimensional en Chile, Encuesta Casen 2022*. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Recuperado el 16 de Mayo de 2025, de <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2022/Informe%20IPM%20-%20PNUD%20-%20CASEN%202022.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2024). *Análisis de la Medida de Pobreza Multidimensional en Chile*. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Recuperado el 3 de Septiembre de 2025, de <https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/analisis-de-la-medida-de-pobreza-multidimensional-en-chile>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2025). *Informe Regional sobre Desarrollo Humano. Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Recuperado el 3 de Septiembre de 2025, de <https://www.undp.org/es/latin->

america/publicaciones/resumen-bajo-presion-recalibrando-el-futuro-del-desarrollo-en-america-latina-y-el-caribe

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD e Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano - OPHI. (2019). *Cómo crear un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional: Usar los IPM para orientar los ODS*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Recuperado el 10 de Julio de 2025, de https://ophi.org.uk/sites/default/files/2024-09/Handbook_2019_Spanish.pdf

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (1990). *Human Development Report 1990*. Bogotá D.C.: Oxford University Press. Recuperado el 9 de Julio de 2025, de <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990escompletonostats.pdf>

Ragin, C. C. (2014). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Los Ángeles: University of California Press. Recuperado el 10 de Septiembre de 2025, de <http://jstor.org/stable/10.1525/j.ctt6wqbwk>

Ravallion, M. (1994). Measuring Social Welfare With and Without Poverty Lines. *The American Economic Review*, LXXXIV(2), 359-364. Recuperado el 3 de Julio de 2025, de <https://www.jstor.org/stable/2117859>

Sánchez Torres, R., Maturana Cifuentes, L., & Manzano Murillo, L. (2020). Estimación alternativa de la pobreza multidimensional en Colombia. *Revista de Economía Institucional*, XXII(43), 137-168. Recuperado el 4 de Marzo de 2025, de <https://doi.org/10.18601/01245996.v22n43.07>

Santos, M. E., Villatoro, P., Mancero, X., & Gerstenfeld, P. (2015). A Multidimensional Poverty Index for Latin America. *OPHI Working Paper*(70), 1-47. Recuperado el 1 de Septiembre de 2025, de https://ophi.org.uk/sites/default/files/2024-01/OPHIWP079_0.pdf

Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Oxford: Oxford University Press India.

Sen, A. (1999). *Desarrollo y Libertad*. Buenos Aires, Argentina: Planeta.

- Stiglitz, J. E., & Sen, A. (2013). *Medir nuestras vidas: Las limitaciones del PIB como indicador de progreso*. Madrid: RBA.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris: Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social - CMPEPS. Recuperado el 20 de Julio de 2025, de <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf>
- Villalobos López, J. A. (2023). La pobreza multidimensional y la pobreza extrema en México 2022. *Semestre Económico*, XXVI(61), 1-25. Recuperado el 8 de Septiembre de 2025, de <http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v26n61/2248-4345-seec-26-61-a4544.pdf>
- Yin, R. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications.